



César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

PROYECTO DE LEY N° _____ DE 2021

“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY 768 DE 2002 PARA ESTABLECER AL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA COMO SEDE ALTERNA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PARA TODOS LOS EFECTOS, DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y SE ESTABLECE LA SEDE ALTERNA DE ALGUNOS MINISTERIOS”

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

DECRETA:

Artículo 1. Modifíquese el artículo 47 de la Ley 768 de 2002, así:

Artículo 47. Sedes alternas. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias cumplirá el papel de sede alterna de la Presidencia y del Congreso de la República para todos los efectos. Así mismo, El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias será sede alterna del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Comercio, Industria, y Turismo; el Distrito Especial y Portuario de Barranquilla, será sede alterna de Ministerio de Transporte y; el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, será la sede alterna del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Parágrafo. El Ministerio de Relaciones Exteriores en asocio con las autoridades, instituciones de educación superior, gremios, asociaciones y sindicatos de los distritos, organizará y pondrá en funcionamiento un centro de estudios internacionales para el área del Caribe, cuya sede principal será la ciudad de Cartagena. Sin embargo, algunos de sus programas podrán desarrollarse en las ciudades de Barranquilla y Santa Marta, donde podrán funcionar también algunas de sus dependencias.

Artículo 2. El Gobierno Nacional en un plazo no superior a un (1) año a partir de la promulgación de la presente ley, reglamentará lo establecido en la misma, en concordancia con lo establecido en la Ley 1952 de 2019 y el artículo 7 de la Ley Orgánica 2082 de 2021.

Parágrafo. Para los demás Ministerios a los que se refiere el artículo 17 de la Ley 1444 de 2011 y/o los que la ley cree o modifique en el futuro, será competencia del Gobierno Nacional decidir su sede alterna, en un plazo no superior a un (1) año.

1

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Cra 7 No. 8-68 Edificio Nuevo del Congreso. Oficina 419-420 Teléfono: 4325100 Ext. 3455 - 3456
Email: clorduy@gmail.com - cesar.lorduy@camara.gov.co

 Cesar Lorduy  @clorduy  @clorduy

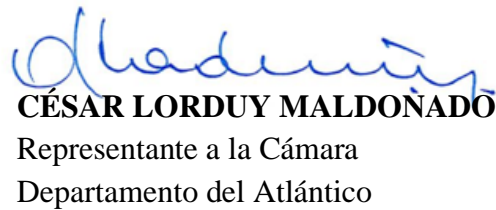
César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

Artículo 3. Vigencia y derogatoria. La presente ley rige a partir de su promulgación, deroga y modifica todas las disposiciones que le sean contrarias.

Del honorable Congresista,



ARTURO CHAR CHALJUB
Senador de la República



CÉSAR LORDUY MALDONADO
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico



ANTONIO ZABARAÍN GUEVARA
Senador de la República



ARMANDO ZABARAÍN D'ARCE
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico



JEZMI BARRAZA ARRAUT
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico



LUIS E. DIAZGRANADOS
Senador de la República




MARTHA VILLALBA
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico



MODESTO AGUILERA VIDES
MODESTO AGUILERA
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico



DIDIER LOBO CHINCHILLA
Senador de la República



JOSÉ LUIS PINEDO
Representante a la Cámara
Departamento del Magdalena




ELOY CHICHI QUINTERO
Representante a la Cámara
Departamento del Cesar



JORGE BENEDETTI MARTELO
Representante a la Cámara
Departamento de Bolívar



ERASMO ZULETA BECHARA
Representante a la Cámara
Departamento de Córdoba



KAREN CURE CORCIONE
Representante a la Cámara
Departamento de Bolívar



JOSÉ ELIÉCER SALAZAR
Representante a la Cámara
Departamento del Cesar



JOSÉ GABRIEL AMAR
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico



ALFREDO APE CUELLO
Representante a la Cámara
Departamento del Cesar



FERNANDO ARAÚJO RUMIÉ
Senador de la República

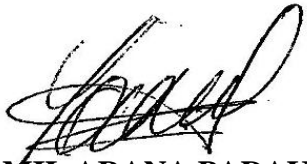
César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico



HERNANDO GUIDA PONCE
Representante a la Cámara
Departamento del Magdalena



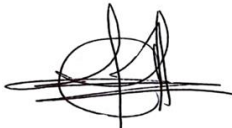
ANDRÉS GARCÍA ZUCCARDI
Senador de la República



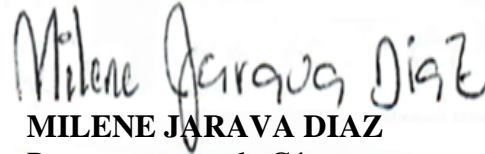
YAMIL ARANA PADAUI
Representante a la Cámara
Departamento de Bolívar



SALIM VILLAMIL QUESSEP
Representante a la Cámara
Departamento de Sucre



ANA MARÍA CASTAÑEDA
Senadora de la República



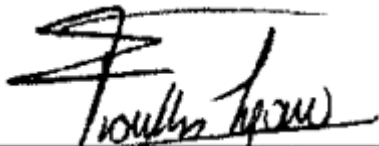
MILENE JARAVA DÍAZ
Representante a la Cámara
Departamento de Sucre



JORGE BURGOS LUGO
Representante a la Cámara
Departamento de Córdoba



DAIRA GALVIS MÉNDEZ
Senadora de la República



FRANKLIN LOZANO
Representante a la Cámara
Departamento del Magdalena



ANDRÉS DAVID CALLE
Representante a la Cámara
Departamento de Córdoba

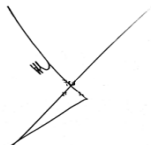
César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico



RUBY HELENA CHAGÜI
Senadora de la República



MARÍA DEL ROSARIO GUERRA
Senadora de la República



HECTOR VERGARA SIERRA
Representante a la Cámara
Departamento de Sucre



JORGE BURGOS LUGO
Representante a la Cámara
Departamento de Córdoba



WADITH MANZUR IMBETT
Representante a la Cámara
Departamento de Córdoba

PROYECTO DE LEY N° _____ DE 2020 CÁMARA

“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY 768 DE 2002 PARA ESTABLECER AL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA COMO SEDE ALTERNA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PARA TODOS LOS EFECTOS, DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y SE ESTABLECE LA SEDE ALTERNA DE ALGUNOS MINISTERIOS”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. OBJETO DEL PROYECTO

Este proyecto de ley tiene por objeto modificar el artículo 47 de la Ley 768 de 2002, para establecer al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias no solo como sede alterna de la Presidencia de la República y del Ministerio de Relaciones Exteriores, como está contemplado en la norma antes citada, sino también del Congreso de la República y del Ministerio de Comercio Industria, y Turismo; al Distrito Especial y Portuario de Barranquilla, como sede alterna de Ministerio de Transporte y, al Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta como sede alterna del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. También se determina que la sede alterna de los demás ministerios existentes o que se lleguen a crear en el futuro, tendrán la sede alterna que determine el Gobierno Nacional.

2. ANTECEDENTES Y TRAMITE DE LA LEY QUE SE PRETENDE MODIFICAR

El proyecto de ley de que dio origen a la ley 768 de 2002, en su momento fue la acumulación de tres proyectos de ley:

- 022 de 1999 Senado “Por la cual se dicta el régimen especial para el Distrito Industrial y Portuario de Barranquilla.
- 087 de 1999 Senado “Por la cual se dicta el régimen especial para el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.”
- 063 de 1999 Senado “Por la cual se establece el Régimen Especial del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta y se dictan otras disposiciones.

Sin embargo, de su ponencia para primer debate salió el proyecto con el título de: *“Por la cual se adopta el régimen político, administrativo y fiscal de los Distritos Portuario e Industrial de Barranquilla, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Turismo, Cultural e Histórico de Santa Marta”*

Es decir, la consideración de que el régimen político administrativa y fiscal se diera para las tres ciudades: Barranquilla, Cartagena y Santa Marta se dio en el transcurso del primer debate del proyecto de ley. Dicha ponencia contaba con 359 artículos, (recordemos que la ley tiene hoy en día 49 artículos). Con respecto a la temática de la que trata este Proyecto de Ley, se encontró que además del artículo referente a **“Sede Alternativa Presidencia de la República y la Cancillería.”**, que pretende modificar esta iniciativa legislativa, los legisladores también contemplaron el siguiente artículo:

“Disposiciones especiales aplicables exclusivamente al Distrito Turístico, Histórico y Cultural de Santa Marta

Artículo 348. *Sede alterna del Congreso de la República. El Distrito Turístico, Histórico y Cultural de Santa Marta tendrá el carácter de Sede Alternativa del Congreso de la República, especialmente para efectos protocolarios y el desarrollo de sus relaciones con los Parlamentos de otras naciones, especialmente las bolivianas, y con los demás Organismos Internacionales.*

Las Cámaras Legislativas, el Congreso Pleno y sus Comisiones Constitucionales Permanentes o las Comisiones legales podrán sesionar válidamente en la jurisdicción del Distrito de Santa Marta.

Para efectos del cumplimiento de lo previsto en la presente disposición, al Congreso de la República corresponderá organizar y poner en funcionamiento las oficinas e instalaciones necesarias en el Distrito Especial de Santa Marta para el desarrollo de las actividades inherentes a la condición de sede alterna dispuesto en la presente Ley, así como lo relacionado con la reparación y realización de eventos, planes y programas que obedezcan a tales propósitos.

Parágrafo. *Para el cabal desempeño de las labores a su cargo que se cumplan en la ciudad de Santa Marta como Sede Alternativa del Congreso, a sus directivos corresponderá*

organizar y adelantar programas de capacitación al recurso humano local que se desempeñará en tales labores.

El gobierno nacional promoverá a Santa Marta como sede de reuniones y encuentros de jefes de Estado y de gobierno y de organismos multilaterales, así como para la realización de conferencias y otros eventos de carácter internacional.

Para el funcionamiento de las dependencias de Congreso en la sede Alternativa del Distrito Especial Turístico, Histórico y Cultural de Santa Marta, se utilizarán las instalaciones de la Quinta de San Pedro Alejandrino, monumento nacional que tendrá el carácter de patrimonio histórico y cultural de la República de Colombia.

Así mismo, se promoverá la celebración de convenios y tratados internacionales para organizar un centro de convenciones, un museo y una biblioteca que funcionarán en la Quinta de San Pedro Alejandrino, que recoja e integre bienes, memorias, elementos, documentos y demás objetos y obras que forman parte del patrimonio histórico y cultural de los países bolivianos e hispanoamericanos.

Para ello se procederá en estrecha coordinación con las entidades y autoridades distritales encargadas de los mismos asuntos y organizará, en asocio con instituciones de educación superior, asociaciones cívicas y gremiales, entidades públicas, un Centro de Estudios Internacionales para el área del Caribe.

En las leyes anuales del Presupuesto General de la Nación se incluirán los recursos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo.

En la conciliación del proyecto de Ley dicho artículo fue eliminado, pero resalta su objetivo de descentralización y búsqueda de que el funcionamiento del legislativo no dependiera de

3. JUSTIFICACIÓN

La historia constitucional de nuestro país, ha sido eminentemente centralista, ha optado por el modelo político del unitarismo y en pocas oportunidades, como se enseñará más adelante, se ha adoptado un sistema descentralizado de manejo de poder. La Constitución Política de 1991 introdujo un manejo plural de esta tradición en la medida en que pudo converger en la misma Carta, el unitarismo con el principio descentralizador con autonomía administrativa. Un paso

que, sin duda, abrió la puerta al desarrollo de las regiones, distritos y municipios comoquiera que pudieron así, darse a su propia gestión. No obstante, el centralismo no modificó en lo absoluto su presencia en el territorio nacional. En términos físicos (no gubernativos, ni económicos) el régimen político, que bien administrado con las regiones, no salió de la ciudad capital, manteniendo así no solo un centralismo político decisorio, sino también un centralismo físico institucional.

3.1 ANTECEDENTES POLÍTICOS DE MOVILIDAD O SEDES ALTERNAS DE INSTITUCIONES DEL ESTADO

La Constitución de 1991, principalmente por tradición de lo contenido en su predecesora de 1886, instauró un modelo todavía centralista para el Estado. No obstante, no se considera aquí que esa deba ser la consigna que haya trascendido hasta ahora, en la medida en que *“la Constitución era vigorosamente centralista y resueltamente autoritaria, en diametral oposición a lo que había sido la anterior, laica, federalista y libertaria. **A pesar de su proclamada descentralización administrativa concentraba la administración en la capital.** Concedía amplísimas facultades al presidente de la República, que tenía la potestad de nombrar a los gobernadores y alcaldes del poder ejecutivo...”* (subrayado propio), esto, al nivel de que uno de los delegatarios encargados de la Constitución, Miguel Antonio Caro, sostuviera: *“‘Hemos hecho una Constitución monárquica’, comentó al cabo alguno de los Delegatarios. Se quejó entonces Caro: ‘Pero electiva’ ”.*

Otra de las apreciaciones realizadas acerca de esta Carta Suprema, estuvo a cargo de López Michelsen, quien propuso desconcentrar el poder institucional basado en Bogotá, y trasladar algunas de las principales sedes de la Nación a otros niveles locales y regionales, indicó que *“No puede ser que la sede central de institutos de crédito como el Banco Popular, el Banco Cafetero, el IFI, La Corporación Financiera Popular, el Banco Ganadero, y otros que sin duda se me escapan, tengan sede en Bogotá y modestas sucursales en otras capitales del país”.* Asimismo, durante una conferencia realizó la siguiente afirmación:

“el balance al final, a mi modo de ver y según los resultados de la Constitución de 1886 sobre la organización de la vida de las regiones, está a la vista. Privados de patrimonio, con rentas insuficientes, poco a poco los departamentos han ido derivando hacia la institucionalización de las



César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

cesiones de las rentas por parte del Estado central, lo cual les hace perder poder a las asambleas y los consejos”

Con esto, López Michelsen se refería a la dominancia que el estado unitario y centralista había ejercido sobre el poder de las regiones. En particular, al hecho a través del cual el gobierno central dispuso del patrimonio de los territorios, transformando el ejercicio de autonomía en la asignación de auxilios que los sometían dicha potestad a la voluntad del gobierno central. Situaciones como la descrita, encuentran asidero en el fin último de Regeneración de la carta fundamental, cual es, la imposición de un régimen unitario que excedía lo político para adentrarse en la imposición de valores tradicionales y una cultura particular respecto de la religión, la lengua y las tradiciones. Es decir, la creación de un país homogéneo en el cual, quien no aceptara dichos valores predeterminados, sería considerado como salvaje o enemigo de la nación. Los detractores del proyecto político allí planteado, tales como los grupos políticos regionales, alegaron que habría un retroceso en la modernización del Estado. En ese mismo sentido, los sectores populares sostuvieron que perdería su participación en democracia y la política al estar sometidos al gobierno central.

En 1975, bajo el mandato de Alfonso López Michelsen, se adelantó el Acto Legislativo 01, por medio del cual se introdujo una modificación al texto constitucional en el sentido de permitir la elección popular de los concejales de municipios y diputados.

Ya bajo la soberanía de la Constitución de 1991, precisamente en 1996, el Ministro cartagenero José Vicente Mogollón Vélez como preámbulo a una conferencia sobre ordenamiento territorial de Bogotá propuso trasladar las sedes políticas y administrativas de la Nación a centros de desarrollo distintos de Bogotá sosteniendo que resultaba estremecedor el panorama de bogotano cómo capital y llamó a “*discutir sobre las fuerzas que han convertido al lugar en el mayor caos organizado*”.

Ahora, no solamente políticos, académicos y periodistas han expresado desde diversas vías el inconformismo que genera el alto nivel de concentración institucional en Bogotá. Es de resaltar al insigne Profesor Yarumo que en su programa de TV proyectado por el Canal Institucional desde 1985, además de sugerir que Barranquilla debía ser la capital de Colombia por su condición como ciudad puerto, planteaba: “*hay que pensar en función del país. Necesitamos planificados que les quepa Colombia en la cabeza y se desprendan de los regionalismos que han impedido desarrollar los*

megaproyectos en ciudades diferentes a Bogotá y Medellín. A Bogotá hay que congelarla dejándola en su tamaño. Esto ha debido hacerse hace mucho tiempo”.

Recientemente, durante el trámite legislativo de la transformación del Departamento administrativo del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre -Coldeportes- en el Ministerio del Deporte, Proyecto de ley No. 078 de 2018 Senado y 285 de 2018 Cámara, se planteó la idea de que fuera la ciudad de Cali la que sirviera como sede. Dicha propuesta superó el debate en el Senado de la República. No obstante, no logró convencer mayorías en la Cámara de Representante, motivo por el cual se procedió a dejar el naciente ministerio en la Capital de la República

Así las cosas, se puede evidenciar que, si bien el debate se ha intentado dar, poco se ha ejecutado al respecto, bien por falta de consensos o por ausencia de proposición concretas como la que ahora nos ocupa. En todo caso, nada obsta para que, se replante el extremo centralismo que permea la arquitectura del Estado colombiano.

4. PAÍSES CON SEDES ALTERNAS DE INSTITUCIONES POLÍTICAS

A nivel internacional la experiencia es muy variada, el traslado de la capital, o de los órganos legislativos han sido una de las opciones más recurrentes que se plantea como alternativa en muchos países.

PAÍS	SEDE- INSTITUCIÓN
PAISES BAJOS	<p>La Haya es la sede del aparato del Estado: allí están el palacio Noordeinde, lugar del trabajo cotidiano de la reina, pues reside en otro lugar, el Gobierno, el Parlamento, el Palacio de Justicia, el cuerpo diplomático, la Corte Internacional de Justicia (el Palacio de la Paz). No obstante, Ámsterdam sigue siendo desde 1806 la capital del Reino de los Países Bajos, aunque de hecho las funciones propias de la capitalidad se ejerzan en La Haya.</p> <p>De la Serna, J. (20 de octubre de 1991). Holanda, Capital Ámsterdam. El País. Recuperado de: https://elpais.com/diario/1991/10/20/opinion/687913201_850215.htm</p> <p>1</p>

PAÍS	SEDE- INSTITUCIÓN
AUSTRALIA	<p>La capital de Australia fue Melbourne por más de dos décadas, desde 1901 hasta 1927, año en que se cambió por Canberra. La razón del cambio fue porque Melbourne era propensa a un bombardeo marítimo por su ubicación. De todos modos, Melbourne continuó siendo capital económica.</p>
ARGENTINA	<p>En virtud del artículo 129 de la constitución de Argentina: La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Una ley garantizará los intereses del Estado nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación.</p> <p>Congreso de la Nación Argentina. Ley 23.512 de 1986, - Registrada bajo el N° 23.512 -.Expediente 0989-D-2019. Sumario: solicitar al poder ejecutivo disponga las medidas necesarias para el cumplimiento de la ley 23512 - de traslado de la capital -, para el traslado del parlamento a las ciudades de Carmen de Patagones, Provincia de Buenos Aires, y de Viedma y Guardia Mitre, provincia de rio negro.</p>
SUDÁFRICA	<p>Antes de unirse cada una de las cuatro colonias tenía su propia capital, y cuando se constituyó el nuevo territorio, surgió el debate sobre cuál de las cuatro debía pasar a ser la capital de todas ellas.</p> <p>Ante la dificultad de decidir cuál de ellas ostentaría ese privilegio, la solución que se encontró entonces —y que ha durado hasta ahora— fue repartir los poderes del Estado entre las capitales del Trasvaal, la Colonia del Cabo y la Colonia del Río Orange —Pretoria, Ciudad del Cabo y Bloemfontein, respectivamente—, y compensar económicamente a la cuarta de ellas, Pietermaritzburg, la capital del Natal.</p> <p>Sudáfrica: Pretoria es la capital administrativa y Ciudad del Cabo la sede del Legislativo.</p>

PAÍS	SEDE- INSTITUCIÓN
	<p>Su capitalidad tiene un estatus especial, pues la componen tres ciudades: Pretoria, sede del poder ejecutivo; Bloemfontein, sede del poder judicial; y Ciudad del Cabo, sede del poder legislativo</p> <p>El orden mundial – EOM-. (2019). ¿Cuál es la verdadera capital de Sudáfrica?. El orden mundial. Recuperado de: https://elordenmundial.com/cual-es-la-verdadera-capital-de-sudafrica/</p>
INDONESIA	<p>Con la reubicación de la capital a unos 1.400 kilómetros de la actual, el Gobierno indonesio espera contribuir a diversificar la economía indonesia, reducir las agudas disparidades regionales y distribuir la población de forma más equilibrada; el área metropolitana capitalina genera ahora cerca de la quinta parte del PIB anual. Si el cálculo se extiende para incluir toda Java, donde viven dos tercios de los 264 millones de indonesios, la cifra se dispara hasta 58%.</p> <p>Las propias circunstancias de Yakarta hacen que el traslado sea imperioso para el presidente. “El caos en Yakarta como centro del Gobierno, de los servicios, de las finanzas y del comercio es demasiado”</p>
BRASIL	<p>En virtud del artículo 18 de la constitución política de Brasil: “La Organización Político-Administrativa de la República Federativa de Brasil comprende la Unión, los Estados, le Distrito Federal y los Municipio, todos autónomos, en los términos de esta Constitución. 10. Brasilia es la Capital Federal. (...)”</p> <p>El caso de Brasil fue lo contrario: se buscaba poblar una ciudad. Río de Janeiro fue la capital de Brasil hasta 1960, cuando Brasilia ocupó su lugar. La nueva capital fue producto de una iniciativa para poblar la meseta central del país y así aprovechar al máximo su extensión.</p>
EGIPTO	<p>En medio del desierto, a 45 kilómetros al este de El Cairo, la nueva capital de Egipto comienza a levantarse. Esta ciudad de nuevo cuño y</p>

PAÍS	SEDE- INSTITUCIÓN
	aún sin nombre -oficialmente se refieren a ella simplemente como "nueva capital administrativa"
MONTENEGRO	En virtud del artículo 7 de la constitución política de Montenegro: LA CIUDAD CAPITAL Y CENTRO ADMINISTRATIVO. El centro administrativo de Montenegro será Podgorica . La ciudad capital de Montenegro será Cetinje .
PANAMÁ	El gobierno tomó la decisión de desplazar los ministerios de Agricultura a Santiago de Veraguas y de Obras Públicas a David.
TAILANDIA	Se propone trasladar la capital fuera de Bangkok, se prevé que para 2024 el Gobierno empiece a mudar 1,5 millón de funcionarios públicos al nuevo centro burocrático.

5. MODIFICACIÓN QUE SE PROPONE PARA EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY 768 DE 2002

LEY 768 DE 2002	PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO 47. Sede alterna. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias cumplirá el papel de sede alterna de la Presidencia de la República y del Ministerio de Relaciones Exteriores, exclusivamente para los efectos protocolarios y para la recepción de delegaciones e invitados especiales del exterior.	Artículo 47. <u>Sedes alternas.</u> El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias cumplirá el papel de sede alterna de la Presidencia y del Congreso de la República para todos los efectos. Así mismo, El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias será sede alterna del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Comercio, Industria, y Turismo; el Distrito Especial y Portuario de Barranquilla, será sede alterna de Ministerio de Transporte y; el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, será la sede alterna del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

LEY 768 DE 2002	PROYECTO DE LEY
<p>Para los fines previstos en esta norma, el Ministerio de Relaciones Exteriores procederá en estrecha coordinación con las entidades y autoridades distritales encargadas de tales asuntos, las cuales tendrán el deber de brindar a aquellas toda la cooperación a su alcance.</p> <p>Parágrafo. El Ministerio de Relaciones Exteriores en asocio con las autoridades, instituciones de educación superior, gremios, asociaciones y sindicatos de los distritos, organizará y pondrá en funcionamiento un centro de estudios internacionales para el área del Caribe, cuya sede principal será la ciudad de Cartagena. Sin embargo, algunos de sus programas podrán desarrollarse en la ciudad de Santa Marta donde podrán funcionar también algunas de sus dependencias.</p>	<p>exclusivamente para los efectos protocolarios y para la recepción de delegaciones e invitados especiales del exterior.</p> <p>Para los fines previstos en esta norma, el Ministerio de Relaciones Exteriores procederá en estrecha coordinación con las entidades y autoridades distritales encargadas de tales asuntos, las cuales tendrán el deber de brindar a aquellas toda la cooperación a su alcance.</p> <p>Parágrafo. El Ministerio de Relaciones Exteriores en asocio con las autoridades, instituciones de educación superior, gremios, asociaciones y sindicatos de los distritos, organizará y pondrá en funcionamiento un centro de estudios internacionales para el área del Caribe, cuya sede principal será la ciudad de Cartagena. Sin embargo, algunos de sus programas podrán desarrollarse <u>en las ciudades de Barranquilla</u> y Santa Marta donde podrán funcionar también algunas de sus dependencias.</p>

6. NORMATIVIDAD

El presente Proyecto de ley se fundamenta en:

6.1 MARCO CONSTITUCIONAL

La Asamblea Nacional Constituyente, se expidió la actual Carta Política. En su artículo primero expuso: “*Colombia es un Estado social de derecho, **organizado en forma de***

República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general". (subrayado propio).

Esta carta, mantuvo el unitarismo proveniente de la Carta anterior y configuró nuevamente la descentralización como uno de sus pilares, así como la autonomía de sus entidades territoriales. Esto último, recobra especial importancia en la medida en que *"la Asamblea Constituyente, en reconocimiento de la existencia de regiones como entidades sociológicas reales, acogió nuestra propuesta, que abría la esperanza de crear Regiones Autónomas como entidades territoriales jurídicamente organizadas"*¹. Este fue un avance para la estructura del Estado colombiano en la medida en que se incluyó la posibilidad de creación de un nuevo ente territorial que, en buena manera, fortalece la creación de regiones sin afectar el unitarismo heredado. La cuestión del unitarismo, que fue uno de los debates durante la Asamblea, ganó su lugar en el articulado, sobre esto se ha afirmado:

*"La constante centralista y el modelo de Estado unitario estuvieron presentes y triunfantes, tanto en el preludio como en el interior de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Los actores, comisiones, debates políticos y académicos formularon un modelo relativamente anclado en las lógicas territoriales constitucionales de 1886 pero aderezado con nuevos principios. En el preludio de la Asamblea Nacional Constituyente se reiteró el modelo territorial unitario, muy a pesar de los vientos que propugnaron otra forma de ser territorial, idea que fue reafirmada por el órgano constituyente, en donde una vez más se instauró el modelo territorial unitario y la figura departamental, bastante mermada y golpeada a lo largo del siglo XX"*² (Subrayado propio)

¹ Verano de la Rosa, Eduardo. Una mirada a las regiones. Encuentro de la Jurisdicción Constitucional. Ed. Universidad del Rosario. 2012

² Estupiñán Achury, L. El ordenamiento territorial en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Lectura socio-jurídica desde el nivel intermedio de gobierno», *OPINIÓN JURÍDICA*, 11(21).

Ahora, sobre la concepción de Estado unitario es importante resaltar las diferencias que existen entre el unitarismo plasmado en las constituciones de 1886 y 1991. Entonces, como se resaltó anteriormente, la Constitución Política de 1886, concebía la forma del Estado colombiano como unitarista con descentralización administrativa, no obstante, se indicó y evidenció que esa fue una tarea que no pudo ser ejercida. En ese sentido, es posible ubicar dicho unitarismo como uno *simple*, en el cual, establece una figura administrativa que sostiene una visión piramidal en su forma, es decir, las ordenes descienden desde la capital, que sería el vértice de dicha pirámide, hasta las bases, conformada por los municipios más alejados. En ese mismo sentido, los recursos naturales, económicos y humanos sirven a la nación haciendo recorrido desde la base, los municipios, al vértice, la capital³. En contraste, la Constituciones de 1991, plantea una forma de Estado unitario compatible con la descentralización administrativa, lo que se ha llamado estado unitario *complejo* que “*son aquéllos que comportan tan sólo una «descentralización administrativamente», pues, en un plano político, la descentralización constitucional o legislativa nos llevaría a una forma política federal o regional*”⁴

La conclusión a la que se puede llegar a través de este recorrido constitucional histórico, es que ciertamente el Estado Colombiano ha tenido una tradición centralista y unitaria que, en mayor medida, proviene de la Constitución del 1886. No obstante, también es válido reconocer que el surgimiento de la Nueva Granada y la República de Colombia estuvieron ligados, también en mayor medida, al establecimiento del federalismo y al reconocimiento de las regiones como territorios capaces, en muchos escenarios, de darse su propia regulación. Sobre tal particular, Eduardo Verano de la Rosa escribió:

“ese Estado nación que propone un patrón de desarrollo económico, político y social centrípeto, es decir, que impele dinámicas solo hacia el centro, hoy muestra y demuestra, por acción y omisión, su radical incapacidad de contener la historia y la pluralidad de las etnias y pueblos que se han asentado en sus confines; su radical incapacidad de interpretar y potenciar la diversidad de sus culturas. La acotada y desigual geometría de un orden político altamente centralizado

³ Badía, Juan Fernando. El Estado Unitario, las formas de Estado y las formas de gobierno. Distinción entre las formas de gobierno, las formas jurídicas de Estado y las “llamadas” formas jurídicas del Estado. 1974.

⁴ *Ibidem*.

propone y dispone de instituciones excluyentes, que dejan por fuera de los beneficios regulares del progreso, que bloquean, incluso, la prosperidad de los espacios regionales —tanto en la dimensión subnacional como en la dimensión trasnacional—.”⁵ (subrayado propio)

De otra parte, es pertinente señalar que la Carta fundamental colombiana, no contempla en su articulado ninguna disposición contraria al objeto del presente proyecto de Ley. Por el contrario, la ejecución de lo aquí previsto, ahonda en la descentralización que incluso la Carta anterior concebía, aunque en menor grado de práctica. Del articulado Superior actual, resulta necesario recordar, la disposición contenida en el Artículo 140, en la que se indica que el Congreso de la República tendrá su sede en la capital de la República, siendo este el único enunciado que fija la sede de un órgano nacional. Así mismo es el Artículo 322 el que indica que Bogotá es Capital de la República, para efectos de darse su autonomía administrativa.

6.2 FUNDAMENTOS LEGALES

El proyecto presentado encuentra sustento jurídico en las siguientes leyes

Con la expedición de la Constitución Política de 1991 se consagró la categoría especial de municipios en el artículo 286.

En el Caribe colombiano con la Ley 768 de 2002 se adoptó el Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos Portuario e Industrial de Barranquilla, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. Les otorga mayor autonomía y establece responsabilidad en las autoridades distritales en términos de planificación, manejo de espacios, y bienes públicos y privados susceptibles de explotación turística.

El artículo 322 de la Constitución declaró a Bogotá como Distrito Capital; el artículo 328 definió que el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y el Distrito Turístico, Cultural e histórico de Santa Marta, conservaran su régimen y carácter.

De la revisión de la Ley 1617 de 2013, puede concluirse que los Distritos Especiales como entidad territorial, cuentan con esquemas de administración y financiación que

⁵ Verano de la Rosa, Eduardo. Una mirada a las regiones. Encuentro de la Jurisdicción Constitucional. Ed. Universidad del Rosario. 2012



César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

permiten una mayor eficiencia en el cumplimiento de metas, programas y proyectos, dado su calificación como “municipio especial”.

Por otro lado, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial -Ley 1454 de 2011- al distribuir las competencias en materia de ordenamiento del territorio (artículo 29) atribuye a los Distritos Especiales la posibilidad de dividir el territorio distrital en localidades, organizarse como áreas metropolitanas y dirigir las actividades que por su denominación y su carácter les corresponda.

El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias en su conformación político-administrativa se encuentra dividida en tres Localidades de acuerdo con la Ley 768 de 2002 y el Acuerdo 006 de 2003, ellas son: Localidad Histórica y del Caribe Norte, Localidad de la Virgen y Turística y la Localidad Industrial y de la Bahía.

Ahora, ninguna de las disposiciones colombianas hace referencia a la posibilidad o imposibilidad de que Cartagena se convierta en sede alterna del Gobierno y sus entidades adscritas.

Esta propuesta puede desarrollarse amparado bajo los preceptos de la autonomía de las entidades territoriales que no restringe la posibilidad de que las instituciones y entidades puedan operar desde un domicilio distinto a la capital de la República. Por esta situación, se considera que nada obsta para que se modifique el artículo 47 de la Ley 768 de 2002.

7. IMPACTO FISCAL

De conformidad con el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia constitucional el Congreso de la República tiene iniciativa en materia de gasto público. En consecuencia, el legislativo se encuentra facultado para presentar y aprobar proyectos de ley que comporten gasto, sin perjuicio que la inclusión de dicho gasto en las partidas presupuestales anuales sea iniciativa exclusiva del Gobierno.

Así lo ha confirmado la Corte Constitucional en sentencias como la C-343 de 1995, C-360 de 1996, C-782 de 2001, C-015A de 2009 y las previamente citadas, entre otras, en las que concluye que a través de iniciativa parlamentaria se pueden promover leyes que decreten gasto público, y que sirven como “*título para que posteriormente, a*

César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

iniciativa del Gobierno, se incluyan en la ley anual del presupuesto las partidas necesarias para atender esos gastos”⁶.

Asimismo, en las sentencias C-755 y C-948 de 2014, la Corte Constitucional precisó que:

“De lo anterior se desprende, por una parte, que la Constitución no requiere iniciativa gubernamental para todas las leyes que decreten gasto. Por otra parte, que los gastos se materializan año a año cuando se incorporan las respectivas partidas a la ley de apropiaciones. En esa medida, tal y como lo sostuvieron en sus respectivos informes el Senado y la Cámara, y lo dijo el Procurador en su concepto, la Constitución distingue entre dos momentos legislativos diferentes. En un primer momento, se expiden diversas leyes que autorizan o decretan gastos, cumpliendo con el principio de legalidad de los mismos. En un segundo momento, el Congreso aprueba o desaprueba las partidas presupuestales en la ley de apropiaciones. El requisito constitucional establecido en el artículo 154 de la Carta exige que haya iniciativa gubernamental única y exclusivamente en el segundo momento, es decir, en el proceso de creación de la ley de apropiaciones. La Sentencia C-409 de 1994, antes citada, dice al respecto: “Podría sostenerse que la función del Congreso de “establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la administración” (CP art. 15-11), referida a una materia de iniciativa gubernamental, comprende toda suerte de leyes que decreten gasto público. No obstante, este punto de vista ignora la naturaleza especial de la ley general de presupuesto - a la cual se remite el citado literal -, cuya función se contrae a estimar para el respectivo período fiscal los ingresos y establecer los gastos a los que se aplicarán, todo lo cual presupone la previa existencia de leyes distintas, unas que hayan arbitrado rentas y otras que hayan decretado gastos.” Las excepciones son de interpretación restrictiva, máxime si ellas suspenden o limitan el principio democrático de la libre iniciativa legislativa, que como tal tiene el carácter de regla general. En este orden de ideas, la interpretación del Gobierno no se compagina con el tenor de la función constitucional contenida en el numeral 11 del artículo 150 de la Carta, que sólo contempla la ley general de presupuesto, mas no así las leyes impositivas y las que decretan gasto público, las cuales sin embargo sirven de base para que se puedan establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la administración. Por lo expuesto, la reserva que existe en materia presupuestal no puede analógicamente extenderse a otras materias, aunque las mismas le sirvan de fundamento.”

⁶ Sentencia C-343 de 1995, Corte Constitucional.

De conformidad con lo establecido artículo 7° de la Ley 819 de 2003, los gastos que genere la presente iniciativa se entenderán incluidos en los presupuestos y en el Plan Operativo Anual de Inversión a que haya lugar.

Teniendo en cuenta lo anterior, y dada la obligación del Estado de velar por el interés general, una vez promulgada la Ley, el Gobierno deberá promover su ejercicio y cumplimiento. Además, se debe tener en cuenta como sustento, un pronunciamiento de la Corte Constitucional, en la cual se puntualizó de acuerdo con la sentencia C-490 de 2011, lo siguiente:

“El mandato de adecuación entre la justificación de los proyectos de ley y la planeación de la política económica, empero, no puede comprenderse como un requisito de trámite para la aprobación de las iniciativas legislativas, cuyo cumplimiento recaiga exclusivamente en el Congreso. Ello en tanto (i) el Congreso carece de las instancias de evaluación técnica para determinar el impacto fiscal de cada proyecto, la determinación de las fuentes adicionales de financiación y la compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo; y (ii) aceptar una interpretación de esta naturaleza constituiría una carga irrazonable para el Legislador y otorgaría un poder correlativo de veto al Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, respecto de la competencia del Congreso para hacer las leyes. Un poder de este carácter, que involucra una barrera en la función constitucional de producción normativa, se muestra incompatible con el balance entre los poderes públicos y el principio democrático. La exigencia de la norma orgánica, a su vez, presupone que la previsión en cuestión debe contener un mandato imperativo de gasto público.” (Resaltado fuera del texto).

Así mismo, la Corte Constitucional en la Sentencia C-502 de 2007, **en la cual establecido que el impacto fiscal de las normas no puede convertirse en óbice y barrera para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa:**

“En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003 constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al Congreso, reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que reside en el Congreso de la República, **con lo cual se vulnera el**

principio de separación de las Ramas del Poder Público, en la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo.

Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la actividad legislativa del Congreso de la República conducirían a concederle una forma de poder de veto al Ministro de Hacienda sobre las iniciativas de ley en el Parlamento.

Es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda.” (Resaltado fuera de texto).

De igual modo, al respecto del impacto fiscal que los proyectos de ley pudieran generar, la Corte ha dicho:

“Las obligaciones previstas en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003 constituyen un parámetro de racionalidad legislativa, que está encaminado a cumplir propósitos constitucionalmente valiosos, entre ellos el orden de las finanzas públicas, la estabilidad macroeconómica y la aplicación efectiva de las leyes. Esto último en tanto un estudio previo de la compatibilidad entre el contenido del proyecto de ley y las proyecciones de la política económica, disminuye el margen de incertidumbre respecto de la ejecución material de las previsiones legislativas. El mandato de adecuación entre la justificación de los proyectos de ley y la planeación de la política económica, empero, no puede comprenderse como un requisito de trámite para la aprobación de las iniciativas legislativas, cuyo cumplimiento recaiga exclusivamente en el Congreso. Ello en tanto (i) el Congreso carece de las instancias de evaluación técnica para determinar el impacto fiscal de cada proyecto, la determinación de las fuentes adicionales de financiación y la compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo; y (ii) aceptar una interpretación de esta naturaleza constituiría una carga irrazonable para el Legislador y otorgaría un poder correlativo de veto al Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, respecto de la competencia del Congreso para hacer las leyes. Un poder de este carácter, que involucra una barrera en la función constitucional de producción normativa, se muestra incompatible con el balance entre los poderes

públicos y el principio democrático. Si se considera dicho mandato como un mecanismo de racionalidad legislativa, su cumplimiento corresponde inicialmente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, una vez el Congreso ha valorado, mediante las herramientas que tiene a su alcance, la compatibilidad entre los gastos que genera la iniciativa legislativa y las proyecciones de la política económica trazada por el Gobierno. (...). El artículo 7º de la Ley 819/03 no puede interpretarse de modo tal que la falta de concurrencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público dentro del proceso legislativo, afecte la validez constitucional del trámite respectivo.” (Sentencia C-315 de 2008).

Como lo ha resaltado la Corte, si bien compete a los miembros del Congreso la responsabilidad de estimar y tomar en cuenta el esfuerzo fiscal que el proyecto bajo estudio puede implicar para el erario público, es claro que es el Poder Ejecutivo, y al interior de aquél, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el que dispone de los elementos técnicos necesarios para valorar correctamente ese impacto, y a partir de ello, llegado el caso, demostrar a los miembros del órgano legislativo la inviabilidad financiera de la propuesta que se estudia.

8. CONTENIDO DEL PROYECTO

El proyecto de ley está estructurado en tres artículos, que buscan, 1) establecer al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena como sede alterna de la Presidencia de la República, el Congreso de la República, el Ministerios de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Comercio, industria y turismo; al Distrito Especial y Portuario de Barranquilla como sede alterna de Ministerio de Transporte y; al Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta como sede del Ministerio de Ambiente y Desarrollo. Asimismo, se ordena su reglamentación por parte del Gobierno Nacional de manera que, a su criterio, organice las sedes alternas de las otras carteras que componen su Rama del poder y, por último, se establece la vigencia.

9. CONFLICTO DE INTERESES

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 3 de la Ley 2003 del 19 de noviembre de 2019, por la cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones, que modifica el artículo 291 de la Ley 5 de 1992, en la que se estableció que el autor del

proyecto y el ponente presentarán en la exposición de motivos la descripción de las posibles circunstancias o eventos que podrán generar un conflicto de interés para la discusión y votación del proyecto, siendo estos, criterios guías para que los congresistas tomen una decisión en torno a si se encuentran en una causal de impedimento.

Frente al Proyecto de Ley propuesto, se considera que pueden existir conflictos de interés relacionados con:

- El interés particular, actual y directo de los congresistas, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, derivados de ser funcionarios de la Rama Ejecutiva del poder público o ocupen cargos que puedan llegar a ser impactados con las modificaciones que se proponen en este proyecto de ley.

Finalmente, sobre los conflictos de interés resulta importante recordar lo señalado por el Consejo de Estado (2019):

“No cualquier interés configura la causal de desinvestidura en comento, pues se sabe que sólo lo será aquél del que se pueda predicar que es directo, esto es, que per se el alegado beneficio, provecho o utilidad encuentre su fuente en el asunto que fue conocido por el legislador; particular, que el mismo sea específico o personal, bien para el congresista o quienes se encuentren relacionados con él; y actual o inmediato, que concurra para el momento en que ocurrió la participación o votación del congresista, lo que excluye sucesos contingentes, futuros o imprevisibles. También se tiene noticia que el interés puede ser de cualquier naturaleza, esto es, económico o moral, sin distinción alguna”.

De igual forma, es pertinente señalar lo que la Ley 5 de 1992 dispone sobre la materia en el artículo 286, modificado por el artículo 1 de la Ley 2003 de 2019:

“Se entiende como conflicto de interés una situación donde la discusión o votación de un proyecto de ley o acto legislativo o artículo, pueda resultar en un beneficio particular, actual y directo a favor del congresista.

- a) Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del congresista de las que no

gozan el resto de los ciudadanos. Modifique normas que afecten investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas a las que se encuentre formalmente vinculado.

b) Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las circunstancias presentes y existentes al momento en el que el congresista participa de la decisión.

c) Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica respecto del congresista, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.”

Se recuerda que la descripción de los posibles conflictos de interés que se puedan presentar frente al trámite del presente proyecto de ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 291 de la ley 5 de 1992, no exime del deber del Congresista de identificar otras causales adicionales.

10. BIBLIOGRAFÍA

Ana Jaraba Salcedo, N. P. (2018). BARRANQUILLA COMO UNA CIUDAD DE CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL SIGLO XXI. *Universidad Simon Bolivar*.

Ángela María Bravo y David Ernesto Rincón A, “Estudio de competitividad en el sector turismo en Colombia”. Universidad del Rosario, Bogotá D.C., Enero de 2013.

Blanco, A. (27 de junio de 2021). Muelle de Puerto Colombia, el ‘viejo’ que se rehúsa a desaparecer. *El Heraldo*.

CORPAMAG. (2013). *PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL "PGAR" 2013-2027*. Santa Marta: CORPAMAG.

DNP. (2011). *Magdalena 2032*. Obtenido de <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/VISION%20MAGDALENA.pdf>

El Colombiano. (2 de abril de 1946). Esthercita Forero, una gran cultivadora de nuestro arte. *El Colombiano*.

El Vocero de la Provincia . (4 de 06 de 2016). *El Vocero de la Provincia* . Obtenido de <https://elvocerodelaprovincia.com/el-magdalena-joya-del-medio-ambiente/>

INVEMAR. (2016). *INFORME DEL ESTADO DE LOS AMBIENTES Y RECURSOS MARINOS Y COSTEROS DE COLOMBIA* . Obtenido de

http://www.invemar.org.co/documents/10182/14479/IER_2016_baja.pdf/4648b25a-fb94-4294-9ecb-a027abb3a211

Olga Lucia Acuña T. y Exilis Ospino Pardo, “Evaluación de Cartagena de Indias como destino turístico en el área del Caribe y análisis de su infraestructura de servicios. Universidad tecnológica de Bolívar, año 2000.

María M. Aguilera Díaz, Camila Bernal Mattos y Paola Quintero Puentes, “Turismo y desarrollo en el Caribe Colombiano”. Banco de la Republica, N° 79 Noviembre 2006.

FAJARDO PINEDA, Oscar David. La dicotomía centralización-descentralización en Colombia. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 2010.

Quintero, A. S. (27 de junio de 2021). *El Heraldo* .

UNESCO. (Abril de 2020). *UNESCO*. Obtenido de https://en.unesco.org/biosphere/lac/sierra-nevada_santa-marta

Plan de Desarrollo Salvemos Juntos a Cartagena 2020 / 2023. Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.

Plan Sectorial de Turismo 2018 – 2022 Turismo: El propósito que nos une. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

LÓPEZ MICHELSEN, Alfonso. El presidencialismo excesivo, el pecado original de la constitución de 1886. Conferencia dictada el 22 de mayo en la Universidad Libre de Pereira. Citado en: FAJARDO PINEDA, Oscar David. La dicotomía centralización-descentralización en Colombia. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 2010


MONROY HERNANDEZ, Claudia Liliana. De Federalismo a Regeneración. El Paso de Estados Soberanos a Departamentos Político – Administrativos. HiSTORELo. Revista de Historia Regional y Local, [S.l.], v. 4, n. 7, p. 218-239, ene. 2012. ISSN 2145-132X

- Ver “El Ministro del Medio Ambiente, José Vicente Mogollón Vélez, recomendó trasladar los centros políticos y administrativos de la Nación” en <https://www.eltiempo.com/amp/archivo/documento/MAM-284917>
- <https://www.puertocartagena.com/es/sala-de-prensa/noticias/puerto-cartagena-se-consolida-a-nivel-mundial>
- <https://www.cepal.org/es/publicaciones/3693-canal-panama-la-economia-americana-latina-caribe-recurso-electronico>
- https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/leyes/2002/ley_0768_2002.pdf
- <http://ieu.unal.edu.co/en/component/search/?searchword=Cartagena&ordering=newest&searchphrase=all&limit=50>
- <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/seguridad-y-defensa/encuesta-de-convivencia-y-seguridad-ciudadana-ecsc>
- <https://www.ovpm.org/es/ciudad/cartagena-colombia/>
- <https://www.dinero.com/opinion/articulo/candidatas-para-reemplazar-a-bogota-de-capital/280446>
- <https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/el-espectador-le-explica-por-que-indonesia-quiere-cambiar-de-capital-y-otros-casos-similares-articulo-877960>
- <https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/proyectos-digitaless/historia-de-colombia/libro/capitulo8.html>

Atentamente,



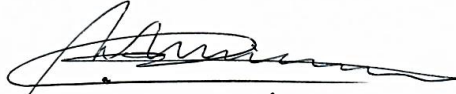
ARTURO CHAR CHALJUB
Senador de la República



CÉSAR LORDUY MALDONADO
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico

27

César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico



ANTONIO ZABARAÍN GUEVARA
Senador de la República



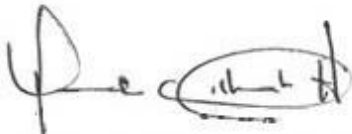
ARMANDO ZABARAÍN D'ARCE
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico



JEZMI BARRAZA ARRAUT
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico



LUIS E. DIAZGRANADOS
Senador de la República

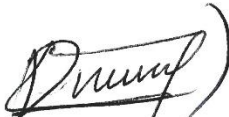


MARTHA VILLALBA
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico



MODESTO AGUILERA VIDES
Representantes a la Cámara
Departamento del Atlántico

MODESTO AGUILERA
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico

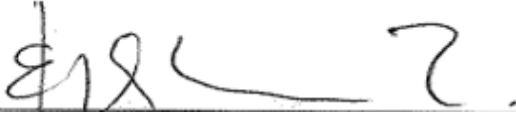


DIDIER LOBO CHINCHILLA
Senador de la República



JOSÉ LUIS PINEDO
Representante a la Cámara
Departamento del Magdalena

César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico



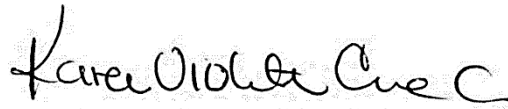
ELOY CHICHI QUINTERO
Representante a la Cámara
Departamento del Cesar



JORGE BENEDETTI MARTELO
Representante a la Cámara
Departamento de Bolívar



ERASMO ZULETA BECHARA
Representante a la Cámara
Departamento de Córdoba



KAREN CURE CORCIONE
Representante a la Cámara
Departamento de Bolívar



JOSÉ ELIÉCER SALAZAR
Representante a la Cámara
Departamento del Cesar



JOSÉ GABRIEL AMAR
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico

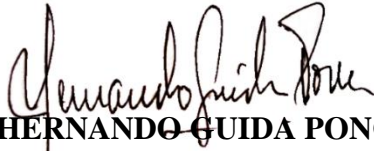


ALFREDO APE CUELLO
Representante a la Cámara
Departamento del Cesar



FERNANDO ARAÚJO RUMIÉ
Senador de la República

César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico



HERNANDO GUIDA PONCE
Representante a la Cámara
Departamento del Magdalena



ANDRÉS GARCÍA ZUCCARDI
Senador de la República



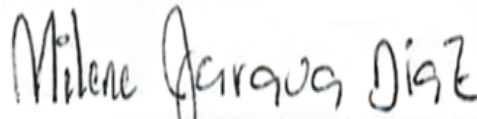
YAMIL ARANA PADAUI
Representante a la Cámara
Departamento de Bolívar



SALIM VILLAMIL QUESSEP
Representante a la Cámara
Departamento de Sucre



ANA MARÍA CASTAÑEDA
Senadora de la República



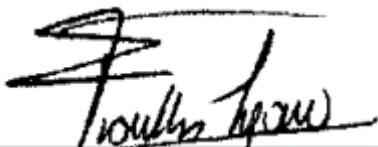
MILENE JARAVA DÍAZ
Representante a la Cámara
Departamento de Sucre



JORGE BURGOS LUGO
Representante a la Cámara
Departamento de Córdoba



DAIRA GALVIS MÉNDEZ
Senadora de la República



FRANKLIN LOZANO
Representante a la Cámara
Departamento de Magdalena



ANDRÉS DAVID CALLE
Representante a la Cámara
Departamento de Córdoba

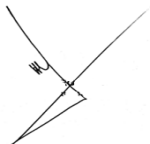
César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico



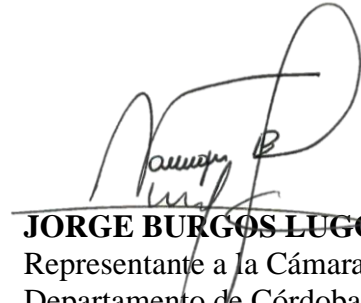
RUBY HELENA CHAGÜI
Senadora de la República



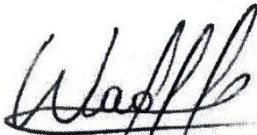
MARÍA DEL ROSARIO GUERRA
Senadora de la República



HECTOR VERGARA SIERRA
Representante a la Cámara
Departamento de Sucre



JORGE BURGOS LUGO
Representante a la Cámara
Departamento de Córdoba



WADITH MANZUR IMBETT
Representante a la Cámara
Departamento de Córdoba